

Balance salarial africano: un tema explosivo

La política, a veces incoherente, de las instituciones financieras internacionales no es ajena a los atrasos en los pagos de salarios en África. Sin embargo, no lo explica todo. Los gobiernos locales también deben asumir sus responsabilidades.

Ibrahim Mayaki

Especialista regional en educación obrera
Oficina de la OIT en Abidjan

En agosto de 2002, cuando el personal de la municipalidad de Bangui decide levantarse en huelga total por ocho días, se debe a que el descontento ha llegado a su grado máximo. Y con razón. La mayoría de los 400 empleados municipales de la capital de la República Centroafricana, se han visto privados de sus salarios durante 42 meses. Conociendo el estado financiero de la administración, es posible que se contenten con negociar el pago de sólo siete meses atrasados. En efecto, hay que estar preparado porque la situación se ha vuelto insostenible. «Desde hace cuatro años no se ha hecho nada para reducir los sufrimientos del personal. Muchos compañeros murieron en la miseria, otros por falta de dinero, han visto morir ante sus ojos a sus esposas, esposos o hijos», se lamenta un representante sindical.

El caso de los funcionarios de Bangui está lejos de ser un caso aislado en África francófona (ver también el artículo de André Linard en página 19). Desde hace dos décadas, el no pago en tiempo de los salarios, en particular en las administraciones estatales y paraestatales, se ha convertido en un fenómeno muy difundido en el continente.

¿Coincidencia? Al mismo tiempo que Malí enfrenta un ajuste estructural, en el resto del continente se producen atrasos en

los pagos a los funcionarios. Si nos remontamos a principios de los años 80, miles de personas son despedidas en la administración pública de Malí. A los despidos se agregan los atrasos en los pagos de aquellos que todavía conservan sus puestos. Dichos atrasos y la eliminación de ciertos privilegios están indudablemente relacionados con la efervescencia del movimiento sindical que toma el control del movimiento democrático y que, en 1991, pone fin al régimen del general Moussa Traoré.

En los años 90, al club de «atrasados salariales» ingresan: Níger, República Centroafricana y Chad. Asimismo, no tardarán en unirse al triste grupo: Benin, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Madagascar y Togo. Los atrasos pueden llegar a los 42 meses. En Níger, también en pleno ajuste estructural, las huelgas contra los atrasos en los salarios se multiplican prácticamente durante toda la década. Para intentar absorber el déficit, el gobierno recurrirá a la emisión de bonos del tesoro a favor de los funcionarios. La operación es un fracaso. Beneficia más que nada a los usureros y especuladores. Hay que esperar al año 1999 para que el diálogo social llegue finalmente a un acuerdo que permita salir de la difícil situación.

Desde huelgas en «ciudades muertas», hasta declaraciones y negociaciones agita-

das, el espinoso problema del no pago de los salarios en numerosos países de África, de habla francesa, sigue siendo una fuente de inestabilidad social y las protestas llevaron a terminar con varios gobiernos que hicieron oídos sordos a la necesidad de diálogo.

Hoy en día, la calma parece haberse restablecido. Numerosos protocolos de acuerdos están en vías de concretarse y algunos países lograron firmar pactos sociales que comprometen a empleadores y sindicatos. Pero, sin la consolidación del aspecto social, sin medidas tendientes a revitalizar la economía y, por supuesto, sin el respeto de los compromisos, este repunte puede llegar a ser de corta duración. Tanto más cuanto que los fenómenos de atrasos en los pagos empiezan a afectar también a trabajadores y trabajadoras del sector privado que hasta el momento no habían sido perjudicados.

Sin duda será necesario atacar el problema desde su raíz. Los gobiernos no están del todo equivocados cuando – como lo hiciera en abril pasado el ministro de Funciones Públicas de Guinea-Bissau, Carlos Pinto Perreira – atribuyen el problema a la coyuntura desfavorable. En mayo último, el gobierno de Guinea-Bissau comenzó a pagar los haberes atrasado de sus docentes y del personal médico, otorgándoles dos meses de salarios de los cuatro que reclamaban. «El no pago de los otros salarios atrasados no es una manifestación de mala voluntad del gobierno sino que es debido a una situación financiera muy difícil», afirmaba el ministro Carlos Pinto Perreira. Si bien se supone que los programas de ajuste instrumentados en Guinea-Bissau permitieron parar la inflación, la deuda pública actual se estima en 743.100 millones de francos CFA (más de un millón de dólares), es decir cinco veces el PBI del país. Un país como Camerún se encuentra endeudado por una cifra que llega a los 5.800 millones de euros. En total, África occidental «debe» a los acreedores internacionales cerca de 70 mil millones de dólares, lo que equivale a nueve décimos del producto bruto interno promedio de la región.

Al parecer, ninguna negociación salarial se hace sin que los gobiernos consulten previamente a instituciones tales como Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, a tal punto que los consejos prodigados por éstas parecen más bien órdenes perentorias. ¿Cómo interpretar de otra manera las palabras del ministro de Educación nacional de Burundi quien, en mayo último, amenazaba con sancionar a los docentes en huelga que luchaban por una reevaluación salarial, argumentando que «no es el momento de pensar en aumentos de salarios cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos está aconsejando disminuir nuestro presupuesto de 3.500 millones de francos de Burundi (4 millones de dólares)»?

No hay que olvidar que, al atraso en el pago de los salarios se debe agregar la tan mentada pérdida del poder adquisitivo para el conjunto de los trabajadores desde los años ochenta. Un docente de enseñanza secundaria de Burundi, con título universitario, cobra un salario inferior a 50 dólares estadounidenses por mes «una suma que le permite pagar sólo el alquiler de una casa, en un barrio miserable de la capital», explica un sindicalista.

En Côte d'Ivoire, los salarios de la función pública están congelados desde 1980 y la devaluación del franco CFA en 1994 no contribuyó a mejorar las cosas en la región. Con respecto a Camerún, un informe del Senado francés señala que, aprovechando la devaluación, «Camerún se rehabilitó de su ajuste pero al precio de cortes presupuestales en la función pública, resultado clásico de las intervenciones del FMI». Este informe que menciona «la política incoherente del Fondo Monetario Internacional, por fortuna moderada por el Banco Mundial» agrega también que «lejos de atenuarse, las desigualdades se acentuaron». En Camerún, la recuperación de los salarios de la función pública, instrumentada en el año 2000, fue más que nada «simbólica».

En Níger, en ocasión de la festividad del 1º de mayo de 2002, las cuatro organizaciones sindicales activas en el país rechazaron al unísono los programas de privatización

«salvaje» de los servicios públicos. Frente a la inflación «galopante», al «deterioro» del poder adquisitivo, a la suba «vertiginosa» de los precios de los productos de primera necesidad, estas organizaciones reclamaron la implementación de planes sociales. Son las mismas acusaciones y la misma crítica unánime que suscitan los programas de ajuste estructural en Burkina Faso. En mayo pasado, todas las organizaciones sindicales de todas las tendencias exhortaban a la huelga. «Un plan social sin intervención del Estado en los sectores sociales. La pobreza no ha dejado ni deja de aumentar, alcanzando actualmente a la mitad de la población de Burkina Faso. ¡En solo diez años, la esperanza de vida pasó de 52 a 46 años!» se podía leer en las pancartas.

En julio de 2002, el salario mínimo en Burkina Faso se estimaba en 25.000 francos CFA (alrededor de 38 dólares) por mes. Más del 45 por ciento de los 11 millones de habitantes con los que cuenta el país viven por debajo del límite de pobreza (menos de 109 dólares por año). Incluso en agosto de 2002, los agentes de la Oficina Nacional de Telecomunicaciones se negaron a ejecutar las instrucciones de su ministro, no aplicando los aumentos previstos en las tarifas de ciertas comunicaciones. En Togo, un alto ejecutivo puede llegar a ganar hasta 230.000 CFA por mes, es decir, apenas 12 dólares por día y eso es considerado un «muy buen sueldo». Para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Africa francófona, la compra de un par de anteojos se calcula que equivale al salario de varios meses, como lo señala una organización no gubernamental. El estado de ánimo sigue decayendo, constataba recientemente el Observatorio de las Funciones Públicas Africanas (OFPA), organismo encargado de registrar y analizar los datos sobre la situación económica y su evolución, con sede en Cotonou, Benin. Para el OFPA ninguna reactivación económica es posible sin una administración sana, pero debido a la falta de condiciones de trabajo atrayentes, el funcionario africano no encuentra motivación.

Aún así, hay que ser cauteloso: una situación incluso dramática puede ocultar

otra todavía más desoladora. Un estudio publicado recientemente por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) relativo a cuatro países africanos de habla francesa (Burkina Faso, Guinea, Malí y Togo) afirma que existen «pruebas concluyentes de la discriminación ejercida contra las mujeres en esos países». Según la CIOSL, las diferencias que todavía existen entre empleos y remuneraciones de hombres y mujeres «indican que la eliminación de la discriminación va a exigir programas de acción positiva mucho más fuertes por parte de los gobiernos».

Nadie niega la dificultad de la coyuntura económica que deben enfrentar los países africanos ni la herencia que tienen que asumir, muy a pesar de ellas, las jóvenes democracias (deudas colosales contraídas por regímenes dictatoriales anteriores, presiones de los acreedores, planes de ajustes que desconocen el aspecto social). Por su parte, cada vez más las organizaciones sindicales locales se ven obligadas a denunciar, además de la prioridad dada a los pagos de la deuda, la mala gestión de las finanzas y los bienes públicos, lo que termina desangrando los magros recursos financieros de los Estados.

El año pasado, los representantes de la organización no gubernamental *Transparency International* de 11 países africanos reunidos en Nyanga, Zimbabwé, señalaron que durante décadas, cerca de 40 mil millones de dólares, provenientes de los países más pobres del planeta, la mayoría de Africa, pasaron en forma ilegal y corrupta a manos de políticos, militares, hombres de negocios y otros dirigentes, yendo a parar al extranjero. La repatriación de esos fondos sería una medida muy acertada en esa región.

Pero habrá que ir mucho más lejos aún para cambiar tan malos hábitos, sobre todo aquellos que adquirieron ciertos dirigentes políticos que confunden todavía las arcas del Tesoro Público con las de sus grupos políticos.

«La corrupción es un mal, un freno para el desarrollo de Côte d'Ivoire», denunciaba recientemente en Abidjan el Director Ge-

neral de Aduanas, Gnamien Konan. «La corrupción existe también en lo más profundo de la sociedad, en la administración y dentro de las fuerzas del orden», estimaba el alto funcionario, fustigando a los responsables políticos, quienes «supuestamente deberían dar el ejemplo».

En septiembre de 2001, la mayoría de los dirigentes de empresas públicas en la República Democrática del Congo fueron despedidos por haber dispuesto sin escrúpulos de los fondos de sus empresas.

A principios del año 2002, nueve magistrados fueron detenidos en Benin, acusados de haber aceptado regalías por un monto total de mil millones de CFA (1,4 millón de dólares). En total, 29 magistrados de Benin fueron culpados de malversación de fondos entre 1996 y 2000.

En Camerún, un censo realizado entre funcionarios públicos en septiembre de 2000 reveló la presencia (¡o mejor dicho la ausencia!) de 15.000 funcionarios «fantasmas» de un total de 135.000 con que supuestamente contaba el país. Claro está que los responsables de esta farsa no olvidaban cobrar sus sueldos.

Aparte de Botswana (6,4 sobre 10), ninguno de los países mencionados en el índice de percepción de la corrupción publicado en agosto de 2002 por *Transparency International*, llega a totalizar cinco puntos sobre diez (el máximo). Existen dos países (Camerún y Madagascar) que se encuentran entre los países «menos transparentes».

Para ser completamente objetivos, agreguemos que Africa no tiene la exclusividad de este flagelo: de 102 países censados en el mundo, cerca de 80 no pasan la prueba de la honestidad, según *Transparency International*.

En ese sentido, la nueva Comunidad para el desarrollo de Africa, NEPAD, podría significar una buena noticia. «Me alegran los objetivos ambiciosos enunciados

dentro del marco de la NEPAD», declaró el Presidente de *Transparency International*, Peter Eigen, a principios del mes de septiembre de 2002, en ocasión de su viaje a Johannesburgo para la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible. «Del mismo modo que, a partir de ahora, las instituciones internacionales y los organismos donadores deben insistir en la transparencia y el buen gobierno, los políticos también deben aceptar el desafío a nivel nacional. El nuevo índice de percepción de la corrupción es claro en ese sentido: la tarea que les incumbe es colosal.» subrayó Eigen.

Quizá habría sido más alentador si la NEPAD hubiera incluido en su concepto a la sociedad civil y a las organizaciones sindicales. Esta exclusión fue señalada con inquietud por los sindicatos africanos reunidos en Durban a fines de julio, bajo la égida de la CIOSL y de la Organización de la Unidad Sindical Africana. Los representantes en Africa de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT, reunidos en Turín, también habían destacado esta preocupación sindical. La reciente propuesta del presidente sudafricano, Thabo Mbeki de incluir consultas tripartitas en la NEPAD y crear un mecanismo institucional para la concertación con los interlocutores sociales podría calmar los temores legítimos de los sindicatos y, sobre todo, otorgarle a la NEPAD la eficacia para captar los grandes problemas económicos y sociales de la que de otro modo carecería.

Mientras tanto, las organizaciones sindicales deberán comprometerse más en la búsqueda de soluciones a los problemas de millones de trabajadores y trabajadoras africanos mal remunerados o no remunerados y los gobiernos y empleadores deberán aprovechar las oportunidades que les ofrece el diálogo social para tratar un tema no sólo candente sino también explosivo.